



El rector de la Universidad de Deusto preside la inauguración de una plaza en memoria de las víctimas tras homenajear a José María Lidón. / ALFREDO ALDAI / EFE

Las víctimas temen la «impunidad»

- Un informe revela que el 62% de los afectados lamentan que no haya un castigo justo
- Muestran «tristeza», creen que molestan a la sociedad y apoyan a las asociaciones

LEYRE IGLESIAS / Bilbao
¿Teme usted que haya impunidad en el final del terrorismo? El 62% responde que sí. El 18%, que no. El 20% no sabe o no contesta. Es el mayor miedo que albergan los familiares de asesinados por el terrorismo que viven en el País Vasco: la impunidad vestida de «pena insuficiente» para los terroristas (23%), de indulto (20%), de falta de investigación (10%), de beneficios penitenciarios (10%) y de ausencia de condena (9%) o de juicio (2%).

Los datos aparecen en un informe pionero encargado por el Gobierno vasco al Instituto Vasco de Criminología, que ha encuestado a 154 personas –dentro de un universo total de «más de 400»– que perdieron a su pareja, a su padre, a su hijo por el zarpazo de ETA (en el 86% de los casos), los GAL (4,5%) o grupos de la extrema derecha del tardofranquismo. El perfil más común: viuda de más de 46 años por un atentado ocurrido en democracia, residente fuera de las tres capitales vascas.

El estudio *Víctimas del terrorismo residentes en la CAPV. Desazón y esperanza en víctimas indirectas de asesinatos. Año 2013*, al que ha tenido acceso EL MUNDO, refleja cómo muchas de ellas están viendo con «dolor» esta etapa de descomposición de la banda terrorista que ha sacudido a la sociedad durante medio siglo. Sólo el 38% asegura sentirse «mejor» ante el fin de los asesinatos. El 12% se encuentra «igual» y el 30% considera que la violencia no

desaparecerá hasta la disolución de ETA.

Los agentes mejor valorados en su contribución a un final del terror «que no provoque más daño a las víctimas» son a gran distancia las asociaciones de víctimas del terrorismo –la primera opción para el 34%–, seguidas de lejos por la «sociedad civil» y «algunos partidos», sin especificar. A la clase política le piden sobre todo más consenso y mayor participación. A la sociedad vasca le dirigen sentencias duras, probablemente realistas. El 65% cree que «prefiere pasar página rápidamente». El 53% percibe que las víctimas la «incomodan».

La visión del trato que les dispensa la administración tampoco es bue-

Próximo informe sobre torturas

> El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha convocado una rueda de prensa hoy en San Sebastián junto con el forense Paco Etxeberria para «anunciar» la elaboración de un amplio informe sobre las torturas.

> El estudio pretende aclarar un fenómeno del que existen 5.500 denuncias públicas (judiciales o extrajudiciales). Tendrá en cuenta a todas las fuerzas del orden, incluida la Ertzaintza.

na: ha cambiado con los años, pero no lo suficiente. Una mayoría no se siente bien tratada por las instituciones (el 51%) y no cree que se haya producido un cambio a mejor desde que asesinaron a su familiar. La queja afecta por igual a las instituciones del Estado, a las vascas y en mayor medida a los ayuntamientos.

También se repite un desconocimiento terrible del proceso contra los supuestos autores del crimen que les cambió la vida. Al 46% no le informaron de la detención de los presuntos culpables; al 71% no se le avisó de los progresos de la causa judicial; al 73% no se le dijo que su caso había prescrito o estaba a punto de hacerlo; al 53% nadie le acompañó ante la Audiencia Nacional; con el

36% no se evitó que coincidiera en la sala con simpatizantes de los terroristas –un 23% no ha tenido juicio y un 35% no sabe o no contesta–.

De las 154 víctimas encuestadas, 82 tienen sentencia condenatoria, pero a muchas les parece «blanda» o «demasiado blanda» (57%). El 68% apoya las medidas de alejamiento entre presos y víctimas; al mismo porcentaje no se le impuso ninguna.

Sobre su posible aportación, el 60% nunca participaría en un *encuentro restaurativo* con un condenado por terrorismo, aunque el 45% ve «bien» estas reuniones, el 30% «mal» y el 25% no se pronuncia. El 60% no participaría en ninguno. Los encuestados reclaman sobre todo que sus testimonios sean recogidos en memoriales y archivos digitales, y participar en debates públicos, en programas en las aulas y en actos de memoria.

Para expresarse sobre su sentimiento actual «ante la posibilidad del fin del terrorismo» en el País Vasco, el 36% habla de «tristeza por no haberse producido antes». A distancia se encuentran la «esperanza», el «alivio» y también la «manipulación».

«En nuestro estudio se señala el dolor actual de todas, independientemente del tiempo transcurrido y de la organización terrorista responsable; su demanda de reconocimiento de que no hubo justificación alguna (...); así como del reconocimiento de la responsabilidad de los autores», dice el informe.

Deusto clama contra la «inhibición»

Bilbao
La Universidad de Deusto homenajeará ayer al juez y profesor José María Lidón, asesinado por ETA en 2001, y a todas las víctimas de la violencia en los 128 años de historia del centro, en un acto en el que el rector, José María Guibert, reprochó que se condenen unos atentados y otros no. El rector criticó que «en pleno siglo XXI»

había todavía «quienes condenan unos actos violentos y se inhiben ante otros», y rechazó que se «degítimé» la vulneración de los derechos humanos.

El homenaje a Lidón, con cuyo nombre se ha bautizado una sala de reuniones de la universidad, contó con la asistencia de la viuda, María Luisa Galarraga, y los hijos, Jordi e Iñigo. En un emotivo

discurso, Jordi Lidón dijo que sus hijos nunca conocerán a su «aitite», pero sabrán que «su legado es imborrable» porque dejó «una huella muy profunda».

Después de que la viuda de Lidón descubriera la placa de la sala con el apellido de su marido, se inauguró una plaza en memoria de todas las víctimas de la violencia y la vulneración de los derechos

humanos en los 128 años de Deusto.

Al doble acto asistieron la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el fiscal de este tribunal, Juan Calparsoro; y el responsable de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, informa Efe.